

**RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO CUARENTA Y TRES CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación n.º 11001 31 03 043 2024 00070 00

Se dirime en primera instancia el resguardo constitucional que Bimotor Concesionario S.A.S., actuando a través de su procurador judicial, instauró contra el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, trámite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso con radicado 11001-40-03-044-2019-00576-00.

ANTECEDENTES

Reclama la protección del derecho fundamental al *«debido proceso y derecho a la defensa»*, como quiera que la accionada realizó la audiencia calendada el 14 de febrero de 2024 sin remitir el link de acceso, a pesar que el secretario *«informó el día de la diligencia que la misma no se llevaría a cabo por cuanto el proceso se encontraba al despacho»*.

Para lo cual pretende *«(...) Se anule por completo la audiencia llevada acabo el 14 de febrero de 2024 y se ordene nuevamente su realización, puesto que como se ha manifestado en los hechos de la presente acción constitucional esta apoderada judicial no se conectó a la audiencia porque le era imposible hacerlo sin el link de la misma y aunado a ello la manifestación del señor secretario donde sostuvo que la misma no se llevaría a cabo.»*.

Perfiló su pedimento en los siguientes hechos relevantes:

1.- En la sede judicial accionada cursa el expediente con radicado 110014003044202100576 00 instaurado por Rafael Andrés Romero Bran contra la convocada, La Equidad Seguros Generales, Bancolombia S.A. y Grupo de Seguros – Productores Integrales Ltda.

2.- En el trámite de ese proceso, en proveído calendado 30 de noviembre de 2023 se señaló fecha y hora para llevar a cabo audiencia el 14 de febrero de 2024.

3.- Contra esa determinación la parte actora interpuso adición, habida consideración que no se había hecho mención de la solicitud de pérdida de competencia, razón por la cual ingresó al despacho el 06 de febrero de 2024, por lo que considera que no se podía llevar a cabo la audiencia, en razón a que el auto que la fijó no había cobrado firmeza.

4.- Alegó que el 14 de febrero no recibió el link correspondiente para el ingreso a la audiencia; por lo que consideró que no se iba a realizar; sin

embargo, a las 11:43 recibió un correo en el que se le indicó que la audiencia estaba en curso.

Ante esa situación el dependiente judicial se acercó al juzgado fustigado donde le dijeron que la vista pública se estaba realizando y que debía conectarse.

5.- La parte actora expuso que en la audiencia programada se resolvió su solicitud de pérdida de competencia y que fue negada, sin la comparecencia de esa parte, lo que impidió recurrir la decisión adoptada.

6.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en auto calendado el 21 de marzo de 2024, decretó la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia proferida el 04 de marzo de la presente anualidad, habida consideración que no se acreditó que se hubiera enterado a Rafael Andrés Romero Bran (demandante), La Equidad Seguros Generales, Bancolombia S.A. y Grupo De Seguros-Productores Integrales Ltda. (demandados) y Coinseg Consultores Integrales de Seguridad Ltda. (vinculada) de la existencia de esta súplica suprallegal¹.

7.- Mediante auto calendado el 22 de marzo hogaño, se ordenó que por secretaría se enterara a las partes indicadas en el numeral anterior², a quienes se remitió comunicación tal y como se avizora en el archivo “004NotificacionAuto”.

RESPUESTA DEL DESPACHO ACCIONADO Y/O VINCULADOS

El **Juzgado Veintidós (22) Civil Municipal de Bogotá**³, replicó que, en efecto, conoce de la causa con radicado n.º 11001400302220210070600 y el 21 de abril de los corrientes profirió sentencia anticipada *«...la que declaró no probadas las excepciones de mérito denominadas “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN”, “BUENA FE” y la “GENERICA”, propuestas por el apoderado judicial del extremo pasivo, se ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó en costas a la parte demandadas»*, incluso, el 3 de mayo siguiente *«...se aprobó la liquidación de costas elaborada por la secretaría»*.

A la par, informó que *«...por cumplir los lineamientos del Acuerdo PCSJA17-10678 del Consejo Superior de la Judicatura, el caso fue remitido a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias el 18/07/2023, el cual se encuentra en proceso de revisión»*.

Por lo anterior, pidió *«...negar el amparo implorado dada la ausencia de vulneración de las garantías fundamentales de la accionante, debido a que el trámite se surtió estricto apego a la ley, la sentencia se encuentra fundamentada en argumentos razonables y legales»*, máxime, cuando *«...el resguardo no cumple con el principio de subsidiariedad, puesto que si la inconformidad radica en la sentencia*

¹ Archivo “002AutoDeclaraNulidad” de la carpeta “02SegundaInstanciaTribunal”

² Véase “003AutoObedezcaseCumplase202400070” de la carpeta “02SegundaInstanciaTribunal”

³ Archivo digital “007RespuestaAcciónDeTutela”.

emitida al interior de este asunto, la tutelante no hizo uso de los recursos establecidos en el ordenamiento procesal vigente, sin que la tutela resulte procedente para revivir los términos para su interposición».

Los vinculados guardaron silencio dentro de la oportunidad procesal correspondiente.

CONSIDERACIONES

Se encuentra radicada en debida forma la competencia en esta oficina judicial teniendo en cuenta lo normado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 333 de 2021.

Esta sede judicial anuncia que se denegará el amparo constitucional, ante la inexistencia de vulneración de las prerrogativas constitucionales reclamadas habida consideración que no se incurrió en una vía de hecho, amén que no interpuso los recursos pertinentes en la oportunidad procesal que le correspondía.

1.- El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 estableció que toda persona tiene la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, **la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados** por la acción o la omisión de cualquier autoridad o contra particular frente al cual se encuentre en condiciones de subordinación. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2.- Corresponde determinar si es procedente esta vía residual para atacar la determinación proferida por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal Bogotá, al interior del expediente con radicado 110014003044201900576 00.

3.- Esta sede judicial anuncia que se negará el amparo deprecado por las razones que se exponen.

4.- Ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia que este instrumento supra legal, en línea de principio, no es la vía idónea para confutar decisiones judiciales, en razón a las nociones constitucionales de autonomía e independencia que gobierna las actuaciones de este linaje y el sometimiento de los conflictos a las competencias ordinarias de los jueces; de manera excepcional procede *“cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador”*⁴, por tanto, no puede el Juez Constitucional inmiscuirse en las actuaciones judiciales, sin trasgredir dicha autonomía,

⁴ Corte Suprema de Justicia, sentencia del 16 de julio de 1999, Exp. 6621

quedando limitada esa intromisión a los eventos en que se evidencie la concurrencia de alguna de las causales de procedencia⁵.

La Corte Constitucional ha sostenido que “(...) no toda irregularidad o anomalía dentro del proceso o inclusive cualquier desacierto judicial abre la posibilidad de que por la vía de la acción de tutela se cuestione, reproche o se revoque una determinada decisión. Solo cuando se compruebe que la decisión judicial en cuestión, dada su gravedad e ilicitud, puede estructuralmente calificarse como clara vía de hecho, puede el juez de tutela entrar a pronunciarse sobre esta. En ese evento la acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo y eficaz para contrarrestar los efectos dañinos y nocivos de la decisión. Por ello, la Corporación ha admitido que pueden tutelarse los derechos fundamentales desconocidos por decisiones judiciales, cuando en realidad estas, dada su abrupta e incompatibilidad con las normas constitucionales o legales aplicables al caso, constituyen actuaciones de hecho.”⁶.

5.- En la revisión del expediente objeto de reclamo constitucional se avizora lo siguiente:

5.1.- Mediante auto calendado 30 de noviembre de 2023⁷ se fijó fecha de audiencia para audiencia de que trata el artículo 373 del Estatuto de los Ritos Civiles para el 14 de febrero de 2024 a las 11 a.m.

5.2.- Posteriormente ingresó al despacho con la solicitud de pérdida de competencia solicitada⁸.

5.3.- Con posterioridad obra el acta de la audiencia y la videograbación de la misma⁹.

5.4.- Auscultada la video grabación, la jueza resuelve la solicitud de pérdida de competencia de manera negativa (véase min. 22:04 de la video grabación).

5.5.- Iniciada la audiencia se pudo evidenciar que la accionante actuó al interior de la misma antes de su finalización, en la que se observa conectada desde el minuto 54:51, en donde fue escuchada, señaló que no había recibido el link de acceso a la audiencia y que se encontraba en la clínica con su hija y presentaba una calamidad doméstica, sin que hubiera atacado dentro de la misma la realización de la audiencia o hubiera presentado nulidad o recurso alguno. Para lo cual la Juez accionada le

⁵ Causales genéricas: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) que no se trate de sentencias de tutela.

⁶ Corte Constitucional. T-211 de 2006. Reiteración de jurisprudencia. M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.

⁷ Archivo 84 del enlace enviado con el escrito de contestación que se encuentra en la carpeta “AnexosContestacion” del archivo digital

⁸ Archivo 85 del enlace enviado con el escrito de contestación que se encuentra en la carpeta “AnexosContestacion” del archivo digital.

⁹ Archivos 086 y 087 de la misma ubicación.

manifestó que no se preocupara, que la sentencia la iba a dictar por escrito, le aceptó la excusa por la calamidad, y recordó que están en el sistema oral y que el auto que fijó la audiencia no fue impugnado, por lo que claro era que la audiencia se iba a realizar.

6.- Así las cosas, a juicio de esta Judicatura, no se cumple con el principio de subsidiariedad, pues solo a través de esta vía la actora pretende *“la nulidad, o la invalidez, o la ineficacia”* de la audiencia realizada el 14 de febrero de la presente anualidad al interior del proceso objeto de esta súplica sin que se haya ventilado su inconformidad contra ese auto, o en la audiencia hubiese hecho alguna manifestación de nulidad para la realización de la misma ante el juzgado convocado, lo que hace que esta vía expedita resulte inadecuada para amparar las prerrogativas constitucionales; por lo que en palabras de la Corte Suprema de Justicia, *“al ser la tutela un mecanismo eminentemente excepcional, subsidiario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o demás procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para que la persona que se sienta agraviada por los efectos de una determinada decisión pueda exponer los motivos de su inconformidad, pues quien acude a este medio debe recorrer primero las vías procesales que las leyes establecen para cada tipo de pretensión y ante los funcionarios competentes”*⁸ de suerte que este mecanismo de defensa judicial no se convierta en herramienta para premiar la desidia, negligencia o indiferencia del gestor.

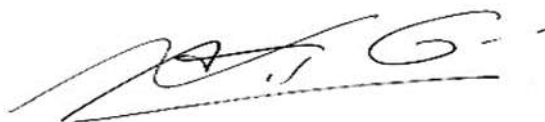
7.- Bajo las circunstancias detalladas, no hay lugar a conceder la protección reclamada.

DECISIÓN

Con las razones atrás expuestas, el **JUZGADO CUARENTA Y TRES CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **NIEGA** el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito, de conformidad con el art. 30 del Decreto 2591 de 1991 y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión dentro del término consagrado en el inciso 2° del artículo 31 de la prenotada disposición.

Notifíquese y cúmplase,



NATALIA ANDREA GUARIN ACEVEDO
JUEZ

Firmado Por:
Natalia Andrea Guarín Acevedo
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 43
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e005845aa2fc091d591903dabba51149fd66781c069e52116750e1983b0018c6**

Documento generado en 04/04/2024 02:46:30 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>